EL PODER PREVENTIVO EN DERECHO INTERREGIONAL *LASTING POWERS OF ATTORNEY IN INTERREGIONAL LAW*

Josep Maria VALLS I XUFRE*

Palabras clave: Poder preventivo, asistencia, derecho interregional, derecho transitorio.

Keywords: Lasting powers of attorney, support, interregional law, transitional rules.

SUMARIO: 1. INTRODUCCIÓN: EL PODER PREVENTIVO COMO INSTRUMENTO IDÓNEO PARA REGULAR LA DISCAPACIDAD. 2. LA DISCAPACIDAD, RAZÓN DE SER DEL PODER PREVENTIVO. 2.1. Mandato, poder ordinario y discapacidad. 2.2. La resolución judicial como causa de extinción del poder ordinario. 3. PANORAMA ACTUAL EN DERECHO COMÚN Y EN LAS LEGISLACIONES FORALES O ESPECIALES. DERECHO INTERREGIONAL. 3.1. A qué legislación debe someterse el otorgamiento. 3.2. La remisión del CC a la curatela y en consecuencia a la autorización judicial. 3.3. La exigente regulación en el Anteproyecto catalán y el nombramiento de supervisor. 3.4. Derecho transitorio. 4. CONCLUSIONES. 5. PUBLICIDAD.

1. INTRODUCCIÓN: EL PODER PREVENTIVO COMO INSTRUMENTO IDÓNEO PARA REGULAR LA DISCAPACIDAD

En este artículo nos centraremos en el poder preventivo, pero lo mismo puede predicarse, en general, de las medidas de apoyo otorgadas ante notario conforme al artículo 255 CC y las asistencias constituidas notarialmente con arreglo al derecho catalán que constituyen nuestro sistema extrajudicial de apoyo al ejercicio de la capacidad jurídica.

La convención de Nueva York proclama la prevalencia de las medidas de apoyo voluntarias sobre las judiciales, a las cuales no se las considera como las más adecuadas porque no se basan en la voluntad y preferencias de la persona.

Como dice Coch Roura *“si en la actualidad los tribunales especializados en modificación de capacidad se hallan totalmente desbordados, ¿cuál sería la situación si su trabajo se incrementase exponencialmente, a la vista del número de decisiones que cada persona que no fuera capaz de autogobernarse (total o parcialmente) precisare tomar a lo largo de su vida?”*¹.

El instrumento ideal y que se ha convertido en poco tiempo en el documento estrella para regular voluntariamente la discapacidad es el poder preventivo.

La regla en la práctica es que los notarios atenderán los casos en que la persona tenga una aptitud plena mediante el poder, así como aquellos en los que el grado de discapacidad sea leve o moderado o con un entorno familiar

* Notario de Barcelona. Miembro de la Comisión de Codificación de la Generalitat de Catalunya.

¹ COCH ROURA, Núria, “La curatela en vista de la Convención de las Naciones Unidas (...)”, *Revista La Notaría*, nº 1, 2018, p. 77.

normal mediante los acuerdos de apoyo o de asistencia, dejando para los jueces los supuestos de discapacidad más grave.

2. LA DISCAPACIDAD, RAZÓN DE SER DEL PODER PREVENTIVO

2.1. Mandato, poder ordinario y discapacidad

Nuestro sistema es tributario del Código de Napoleón que equipara mandato y representación. Por eso, solo se regula el mandato y solo encontramos una referencia al poder en el artículo 1280, 5° CC, al exigir que conste en documento público “*el poder para contraer matrimonio, el general para pleitos y cualquier otro que tenga por objeto un acto redactado o que deba redactarse en escritura pública o haya de perjudicar a tercero*”. En cambio los pandectistas alemanes (Ihering, Windscheid, Laband) sentaron la distinción entre mandato y representación que recogieron los códigos civiles alemán e italiano, regulando separadamente ambas figuras. En nuestro ordenamiento al no regularse la representación, hemos de acudir a las normas del contrato de mandato para configurar la institución, incluso cuando se trata de representación legal cuyas lagunas se llenan con los preceptos del mandato².

Como dice León Alonso, los ordenamientos jurídicos modernos siempre han tenido como presupuesto esencial para la perduración del mandato la llamada *perseverantia consensus*³. Añade Garrido Palma que el mandato es el prototipo de contrato de gestión⁴. Contrato bilateral, durante la ejecución del cual, una de las partes puede devenir incapaz, y valga la redundancia incapaz para hacer frente a los abusos del apoderado mediante su principal arma que es la revocación y la acción para exigir responsabilidades al apoderado en la rendición de cuentas.

No cabe aducir que el mandato es un contrato bilateral y el poder, en cambio, es un acto unilateral. El poder es la externalización del mandato. Puede otorgarse un poder sin mandato e incluso sin que el apoderado lo sepa. No hará falta que haya una aceptación expresa; la aceptación puede ser tácita, lo que ocurrirá por el simple ejercicio del poder y, a partir de ahí, se aplicarán las normas del contrato de mandato establecidas en el CC o en el de Catalunya o legislación foral que corresponda.

Por lo tanto, en base a esta equiparación con el mandato, el poder debería extinguirse en el momento en que el poderdante pierda de hecho la capacidad y así era en nuestro derecho histórico⁵.

² VALLS XUFRÉ, Josep Maria, *El poder preventivo*, Tirant Lo Blanch, Valencia 2018, pp. 26 y ss.

³ LEÓN ALONSO, José R., “Comentarios a los artículos 1709 a 1739 CC”, en ALBALADEJO, Manuel y DÍAZ ALABART, Silvia (coord.), *Comentarios al Código Civil y Compilaciones forales*, Edersa, Madrid, 1996.

⁴ GARRIDO DE PALMA, Víctor Manuel, “La protección de los discapaces, la autotutela y el poder preventivo de protección”, *Anales de la Academia Matritense del Notariado*, vol. 46, 2009, pp. 63-86.

⁵ En este sentido, vid. DE AMUNÁTEGUI RODRÍGUEZ, Cristina, *Incapacitación y Mandato*, La Ley, Madrid, 2008, p. 193.

El problema es que, en la mayoría de los casos, la incapacidad se produce de forma progresiva, deteriorándose la capacidad natural de forma gradual (piénsese, por ejemplo, en los casos de Alzheimer o de demencia senil). Entonces: ¿Cuál es el momento en que se produce la anulación del poder? Esta consideración y la necesidad de protección a terceros hizo que se fuera decantando la jurisprudencia hacia la incapacitación judicial como causa de extinción del poder.

2.2. La resolución judicial como causa de extinción del poder ordinario

El legislador zanjó la cuestión en la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero de protección jurídica del menor⁶ que incluyó expresamente la incapacitación como causa de extinción del mandato, ratificando así la posición de los que entendían que el mandato, y por ende, el poder, solo se extinguen por la incapacitación judicial. La jurisprudencia, además, lo reafirmó argumentando que *“la terminología utilizada por el legislador zanja la controversia entre incapacidad natural o legal, en favor de la extinción del poder solo por la sentencia de incapacitación, con independencia de la pérdida anterior de la capacidad natural”* (STS de 11 de octubre de 2000).

La Ley 8/2021 al regular, en el artículo 1732 CC, las causas por las que el mandato se extingue, vuelve a insistir en la idea de resolución judicial incapacitante como motivo de extinción: *“Por la constitución en favor del mandante de la curatela representativa como medida de apoyo para el ejercicio de su capacidad jurídica, a salvo lo dispuesto en este código respecto de los mandatos preventivos”*.

Lo mismo en el CCCat, cuyo art. 622-33 establece: *“1. El mandato se extingue, además de por las causas establecidas por el título de constitución o por la ley, por: ... c) La muerte, la declaración de muerte o de ausencia, la modificación judicial de la capacidad .”*

Por tanto, en la actualidad, el poder ordinario subsiste a pesar de la discapacidad natural del poderdante y no se halla sujeto a las reglas y salvaguardas del poder preventivo, entre ellas, la autorización judicial para actos de administración extraordinaria o de disposición, en virtud de la remisión que el artículo 259 CC hace a las normas de la curatela salvo que el poderdante haya determinado otra cosa.

3. PANORAMA ACTUAL EN DERECHO COMÚN Y EN LAS LEGISLACIONES FORALES O ESPECIALES. DERECHO INTERREGIONAL

Aparte del Código civil común solamente encontramos una regulación específica del poder preventiva y de la asistencia voluntaria constituida notarialmen-

⁶ BOE n.º. 15, de 17 enero 1996.

te en el derecho catalán. El derecho civil de Aragón⁷ y el de Navarra⁸ se limitan a reconocer la existencia de poderes con cláusula de subsistencia u otorgados para el caso de discapacidad. Casi es de agradecer, porque la diferente regulación catalana, por sí sola, y más aún con la del actual Anteproyecto, provoca una serie de problemas que son el objeto propio de este estudio a saber:

Primero: A qué legislación debe someterse el otorgamiento.

Segundo: La remisión que el código común hace a la curatela, y en consecuencia a la autorización judicial que el apoderado preventivo general necesita, para verificar actos de administración extraordinaria o de disposición, a no ser que se le haya exonerado expresamente. Antes de la Ley 8/2021 no era así, hoy es equivalente a la existente actualmente en Cataluña, pero el nuevo Anteproyecto catalán parte de la regla contraria.

Tercero: La regulación del poder preventivo en el Anteproyecto⁹ catalán es mucho más minuciosa exigiendo por ejemplo el nombramiento de un Supervisor cuando el apoderado no sea pariente del poderdante, o sea más allá del tercer grado en la línea colateral.

Cuarto: Los problemas de derecho transitorio que se generarán al haberse otorgado poderes preventivos con arreglo a la legislación anterior en uno y otro caso.

Los examinaremos a continuación.

3.1. A qué legislación debe someterse el otorgamiento

Ante todo hay que plantearse la cuestión de si el otorgamiento de un poder preventivo y, en general, de un acuerdo voluntario de apoyo debe someterse a la ley del lugar donde se otorga o a la ley donde reside el otorgante. En nuestro país, el problema se complica con las distintas vecindades civiles y la cuestión es si debe prevalecer la vecindad o la residencia habitual del poderdante. Así como en sucesiones soy un firme partidario de la nacionalidad y de la vecindad civil del causante (sobre todo en legítimas), en materia de acuerdos voluntarios de apoyo me inclino por la residencia habitual del otorgante, es decir, que el otorgamiento se verifique de acuerdo con la legislación más inmediata a la persona necesitada de apoyo, o sea, la residencia habitual.

Sin duda tratándose de extranjeros el criterio de la residencia es el más adecuado pues evita el problema de la vecindad civil del extranjero en nuestro país.

⁷ Art. 109 Código del Derecho Foral de Aragón. Decreto Ley 1/2011 de 22 de marzo, del Gobierno de Aragón.

⁸ Ley 49 Fuero Nuevo de Navarra. Ley Foral 21/2019 de 4 de abril.

⁹ El Anteproyecto de *LLei de modificació del Codi Civil de Catalunya en matèria de Suports a l'Exercici de la Capacitat Jurídica de les Persones* se halla en fase de audiencia de información pública y puede consultarse en la web de la Generalitat.

No podemos entrar aquí en la discusión de si los extranjeros residentes en España pueden adquirir la vecindad civil del lugar donde residen, o quedan sujetos siempre al derecho común mientras no adquieren la nacionalidad española.

La cuestión es en verdad candente en la actualidad después de la controvertida sentencia de la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca en la que se niega la vecindad civil a los extranjeros, si bien resuelve a favor de la aplicación de la ley de la residencia habitual (Mallorca) en base al Reglamento Europeo de Sucesiones (Reglamento UE 650/2012)¹⁰.

El nuevo artículo 9.6 CC en su segundo párrafo apoya mi opinión, hoy ya bastante general: *“La ley aplicable a las medidas de apoyo para personas con discapacidad será la de su residencia habitual. En el caso de cambio de residencia a otro estado, se aplicará la ley de la nueva residencia habitual, sin perjuicio de reconocimiento en España de las medidas de apoyo acordadas en otros estados”*. Este precepto está redactado pensando en las medidas de apoyo legales o impuestas, más que en las medidas de apoyo voluntarias, entre las que se destaca el poder preventivo, pero nos sirve igualmente.

Lamentablemente, España no ha ratificado todavía el Convenio sobre Protección Internacional de los Adultos, elaborado en el año 2000 por la Conferencia de la Haya de Derecho Internacional Privado. En su artículo 15 se establece una fórmula de *professio iuris*: *“1. La existencia, alcance, modificación y extinción de los poderes de representación conferidos por un adulto, en virtud de un acuerdo o por un acto unilateral, para ejercitarse cuando dicho adulto no esté en condiciones de velar por sus intereses, se regirán por la ley del Estado de la residencia habitual del adulto en el momento del acuerdo o del acto unilateral, a no ser que haya designado expresamente por escrito alguna de las leyes mencionadas en el apartado 2.*

2. Los Estados cuyas leyes podrán designar son:

a) un Estado del que el adulto posea la nacionalidad;

b) el Estado de la anterior residencia habitual del adulto;

¹⁰ La sentencia 529/2020 de la sección tercera de la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca resuelve un recurso de apelación de una sentencia del Juzgado de Primera Instancia que desestimó el recurso judicial contra la resolución de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública (DGSJFP) por la que se confirmaba la negativa del registrador de la propiedad a inscribir una donación con pacto de definición otorgada por un extranjero residente en Mallorca. Sobre esta sentencia y la Resolución de la DGSJFP de la que trae causa, véase el foro publicado en esta Revista, en su número 1 de 2022 (pp. 219-239), con contribuciones de FERNÁNDEZ-TRESGUERRES GARCÍA, Ana e IRIARTE ÁNGEL, Francisco de Borja. Asimismo, cabe mencionar la posterior Resolución de la DGSJFP de 20 de enero de 2022, en la que, a pesar del revés judicial que supuso la sentencia de la AP antes citada, reiteró su anterior doctrina (véase el comentario crítico de ÁLVAREZ GONZÁLEZ, Santiago, “¿Puede un extranjero acogerse al pacto de mejora gallego? El Reglamento 650/2012 y la Resolución de la DGSJFP de 20 de enero de 2022”, *Revista de Derecho Civil*, vol. 9, núm. 1, 2022, pp. 1-34.

c) un Estado en el que se encuentren situados bienes del adulto, con respecto a dichos bienes.

3. Las modalidades de ejercicio de dichos poderes de representación se registrarán por la ley del Estado en el que se ejerciten.”

Estoy a favor de estos planteamientos pues para mí, la cuestión fundamental es determinar la ley aplicable al poder preventivo en el momento de su otorgamiento, la ley que configurará la institución de forma definida desde el principio, estableciendo las medidas de control a la actuación del apoderado y los órganos encargados de ello, puntos que afectan no solo al poderdante sino también a los terceros y a la seguridad del tráfico jurídico en general.

Esa ley puede establecer, con carácter imperativo o dispositivo, limitaciones a las facultades dispositivas del apoderado o, en su caso, imponerle medidas de control de su gestión y, que en la medida que el poderdante las ha tenido en consideración, en el momento del otorgamiento deben respetarse durante la vigencia del poder y habrá que tratar de mantenerlas en cuanto sea posible.

3.2. La remisión del CC a la curatela y en consecuencia a la autorización judicial

La remisión a la autorización judicial (salvo disposición en contra del poderdante) que precisa el apoderado preventivo general, en los mismos casos en que la ley exige para el curador, es una inadmisibles rémora generadora de problemas de interpretación y de conflictos intertemporales, interregionales, e internacionales que además es paradójicamente inexplicable si se tiene en cuenta que como hemos visto no es exigible en un poder ordinario, aun cuando el poderdante sufra después de otorgarlo una discapacidad sobrevenida.

Si a un poder ordinario se le añade una cláusula de subsistencia para caso de discapacidad lo estamos convirtiendo en un poder preventivo; pero la remisión a las normas de la curatela y especialmente a la autorización judicial ¿desde cuándo es necesaria?; ¿desde el mismo momento de otorgamiento del poder o solo a partir del momento en que el poder ordinario se convierte en preventivo por haber sobrevenido la causa de discapacidad?; ¿quién decide cuando ha llegado ese momento? En un poder preventivo puro queda muy claro puesto que el poderdante ha establecido las circunstancias a partir de cuyo momento será vigente, pero en el poder con cláusula de subsistencia en caso de discapacidad no hay necesidad de establecer ese cuando, pues el poder es vigente desde su otorgamiento.

Esta es la paradoja que genera la autorización judicial¹¹, pero no acaban aquí los problemas que provoca la interpretación del artículo 259 CC: ¿qué

¹¹ Para una exposición más extensa de esta cuestión véase VALLS XUFRÉ, Josep Maria, *El poder preventivo*, op. cit., pp. 70 y ss.

debe entenderse por un poder que “*comprenda todos los negocios del otorgante*”? Podrá decirse que se trata del típico poder general, con su interminable enumeración de facultades, pero todos sabemos lo difícil que ha sido determinar las atribuciones que comprende un poder general, las discusiones doctrinales y jurisprudenciales que ha originado. Me remito a mi artículo *Poder general versus poder concebido en términos generales*¹².

García Guardiola apunta que la práctica jurídica ha acuñado la terminología poder general para aquel que afecte a todos los asuntos del poderdante e incluye las más amplias facultades de actuación para el mandatario¹³. En el Anteproyecto catalán, se aborda esta delicada problemática con un precepto explícito en el que se define el poder preventivo general *como aquel que incluye todas las facultades legalmente delegables en el ámbito personal o patrimonial, incluso aquellas para las que la ley exige mandato expreso sin que sea necesario enumerar las facultades del apoderado. Se exceptúan las excluidas en el otorgamiento y las facultades de disposición a título gratuito, aval o fianza personal o real que han de ser expresamente atribuidas aun cuando sea de forma genérica. Puede otorgarse con carácter general respecto de uno o más negocios u objetos determinados*. La idea es que el poder general, titulado como tal por el poderdante, no necesitará de una enumeración exhaustiva de facultades, sino que, por el contrario, solo deberá explicitarse aquellas que no se atribuyen al apoderado o que se condicionan a determinados requisitos como puede ser la autorización del supervisor, una tasación previa o cualquier otra medida que se imponga.

3.3. La exigente regulación en el Anteproyecto catalán y el nombramiento de supervisor

El Anteproyecto catalán regula minuciosamente, en algunas ocasiones con carácter imperativo, muchos aspectos de las medidas de apoyo y con grandes diferencias con el derecho común. Ya no se habla de curatela sino de asistencia, notarial o judicial y dentro de esta última la solicitada voluntariamente y la impuesta. Aquí por su novedad e importancia diferencial me centraré en la supervisión que se configura como una de las salvaguardas de carácter general en toda medida de apoyo.

Defino la supervisión como la función de control extrajudicial de la actividad de quien presta el apoyo y que el otorgante o el juez puede encomendar a una persona u órgano con la extensión y facultades que se determine en cada caso, especialmente en cuanto a la rendición de cuentas y a la autorización de determinados actos de administración extraordinaria y de disposición.

¹² VALLS XUFRE, Josep Maria, “Poder general versus poder concebido en términos generales”, *Revista La Notaria del Colegio Notarial de Cataluña*, nº 2-3, 2016.

¹³ GARCIA GUARDIOLA, Salvador, *El mandato*, Instituciones de Derecho privado, Ed. Thomson Civitas, 2005, p. 1311.

En Cataluña el Anteproyecto impone obligatoriamente la supervisión en los poderes preventivos y en la asistencia notarial, salvo que el apoderado o asistente sea cónyuge, pareja estable o pariente en línea recta o colateral de tercer grado por consanguinidad del asistido. Se regula ampliamente la figura del supervisor, quien asumirá la revisión de las medidas de apoyo, la rendición de cuentas, la impugnación de actos realizados sin la suficiente legitimación, etc.

3.4. Derecho transitorio

La Ley 8/2021 en su disposición transitoria tercera establece: *“los poderes y mandatos preventivos otorgados con anterioridad a la entrada en vigor de la presente ley quedarán sujetos a esta. No obstante, cuando, en virtud del artículo 259, se apliquen al apoderado las reglas establecidas para la curatela, quedarán excluidas las correspondientes a los artículos 284 a 290 del Código Civil”*. Entre las normas excluidas está la relativa a la autorización judicial prevista para la curatela en el artículo 287 CC.

Esta disposición transitoria evita que se exija la autorización judicial al apoderado cuando se trate de poderes preventivos otorgados bajo el imperio del artículo 1732 CC, es decir antes del 3 de septiembre de 2021, en cuya virtud no es necesaria la autorización judicial en ningún caso. A partir de esa fecha es evidente que si el poderdante quiere exonerar al apoderado de dicha autorización judicial deberá hacerlo expresamente en los poderes generales.

En Cataluña hay que distinguir entre los poderes otorgados antes del 1 de enero del año 2011 y los posteriores. Los otorgados antes de dicha fecha como quedaban sujetos a lo establecido en el Código Civil común no puede tenerse en cuenta la exigencia de la autorización judicial que establece el artículo 222-44 CCCat. Para los posteriores, el Anteproyecto vuelve otra vez al principio contrario, pues no contempla la autorización judicial, salvo que el poderdante la imponga.

El problema no acaba aquí pues el artículo 109 del Código de Derecho Foral de Aragón establece que, *“cualquier persona mayor de edad y con la capacidad de obrar suficiente podrá, en escritura pública, otorgar un mandato que no se extinga por su incapacidad o incapacitación”*. Como el lector habrá adivinado no existe ningún precepto en Aragón que exija la autorización judicial para que el apoderado preventivo pueda hacer actos de administración extraordinaria o de riguroso dominio de inmuebles.

Igualmente, la Ley 43 del Fuero Nuevo de Navarra establece en su tercer párrafo que: *“... toda persona capaz puede otorgar en escritura pública poderes cuya vigencia se inicie y desarrolle en el momento en que, por modificación judicial de su capacidad, se halla impedida o necesitada de apoyo para actuar por sí misma y en previsión de tales circunstancias”*.

Debemos ser realistas, la autorización judicial puede tardar meses y, en la práctica, los tribunales se hallan totalmente desbordados y no se vislumbra la posibilidad de que esto cambie. El buen criterio de los notarios, abogados y demás profesionales mediante su consejo informado pondrá de relieve, en cada caso, las ventajas e inconvenientes de mantener la autorización judicial prevista en la Ley o excluirla, sustituyéndola por una supervisión extrajudicial.

4. CONCLUSIONES

El panorama de las facultades de representación en España es francamente complicado en la práctica, pues nos encontramos con poderes ordinarios, poderes preventivos, acuerdos de soporte, voluntarios o judiciales, además de las resoluciones judiciales por la que se nombra tutor (solo menores de edad no sujetos a la potestad parental), curador o asistente en el caso de Cataluña.

A todo ello añadamos las distintas regulaciones, según la fecha de otorgamiento. Ciñéndonos a la representación voluntaria:

Primero: Los poderes ordinarios otorgados en cualquier momento y lugar de España, son válidos y sin más restricciones que las impuestas por el poderdante, en tanto no sean revocados voluntariamente o por la resolución judicial que modifique la capacidad jurídica del otorgante.

Lo mismo para los poderes con cláusula de subsistencia u otorgados en previsión de discapacidad con arreglo al art. 1732 CC, hasta la entrada en vigor de la ley estatal 8/2021, el 2 de septiembre siguiente. También para los otorgados con arreglo al derecho de Aragón o de Navarra pues no les afecta la citada ley estatal.

Segundo: Poderes preventivos otorgados a partir del 1 de enero de 2021 en Cataluña por poderdante residente habitual (si no es residente puede otorgarlos con arreglo al CC). El apoderado necesita autorización judicial para los actos de administración extraordinaria, salvo exclusión expresa. Así es hasta que se apruebe la nueva ley, pues el Anteproyecto catalán parte del principio contrario.

Tercero: Poderes preventivos otorgados con arreglo a derecho común a partir de 3 de septiembre de 2021. Si son generales hay remisión a la curatela y, por tanto, a la autorización judicial, salvo expresa disposición del poderdante.

Cuarto: Acuerdos voluntarios de soporte en derecho común o nombrando asistente en derecho catalán, en los que es aplicable lo dicho anteriormente para los poderes.

A todo ello hay que añadir que ante la copia auténtica de un poder, en este momento, no hay forma de saber si está vigente o revocado. Lo mismo ocurre

con el poder preventivo (o un acuerdo voluntario de soporte o de nombramiento de asistente) pues aunque se inscribe en el Registro Civil, no existe de momento un acceso telemático directo, a diferencia por ejemplo del Registro de Concursados.

5. PUBLICIDAD

El número 10º del artículo 4 de la Ley del Registro Civil (LRC) contempla la inscripción de los *“poderes y mandatos preventivos, la propuesta de nombramiento de curador y las medidas de apoyo previstas por una persona respecto de sí misma o de sus bienes”*. Según el artículo 72 de la misma Ley: *“La resolución judicial dictada en un procedimiento de provisión de apoyos, así como la que la deje sin efecto o la modifique, se inscribirán en el registro individual de la persona con discapacidad. La inscripción expresará la extensión y límites de las medidas judiciales de apoyo”*.

Cabe destacar que, un poder general ordinario no será objeto de inscripción en el Registro Civil mientras que un poder preventivo sí, tanto si es general como especial, por lo que si el poderdante tiene la idea de que el poder subsista hasta su muerte, deberemos aconsejar la forma preventiva para que pueda tener acceso a la publicidad registral, por la mayor seguridad del tráfico jurídico.

Lo mejor de la reforma es la concepción del Registro Civil como la pieza central del sistema de publicidad de las medidas de apoyo, tanto judiciales como extrajudiciales. Como explica Corera Izu¹⁴ la reforma, además, completa *“el proceso iniciado con la LRC de 2011 en la línea de atribución de competencias al notario, que ya marcó la Ley de Jurisdicción Voluntaria”*. El acceso telemático directo a la información contenida en los asientos registrales es el mejor instrumento para garantizar el triunfo en la práctica de las medidas de apoyo y su eficacia en relación a terceros, así como su principal garantía. Efectivamente en el primer párrafo del artículo 84 LRC se dice que *“(…) las administraciones públicas y los funcionarios públicos podrán acceder a los datos especialmente protegidos (...) cuando en el ejercicio de sus funciones deben verificar la existencia o el contenido de medidas de apoyo”*.

En cuanto al Registro de la Propiedad, el art.755 LEC impone al letrado de la Administración de Justicia la comunicación al Registro Civil de las sentencias y resoluciones judiciales en materia de apoyos, pero *“sólo a instancia de parte en otros Registros públicos como el de la Propiedad, el Mercantil o el de Bienes Muebles”*. Por su parte, el nuevo artículo 242 bis de la Ley Hipotecaria establece: *“En el Libro sobre administración y disposición de bienes inmuebles a que se refiere el número cuarto del artículo 2 serán objeto de asiento las reso-*

¹⁴ CORERA IZU, Martín, “La nueva Ley del Registro civil y del Notariado”, *Revista El Notario del Siglo XXI*, agosto 2021, núm. 98, p. 28.

luciones dictadas en los expedientes de declaración de ausencia y muerte, las de concurso establecidas en la legislación concursal, así como las demás resoluciones y medidas previstas en las leyes que afecten a la libre administración y disposición de los bienes de una persona”.

Evidentemente, no quedan incluidos los poderes preventivos, puesto que el poderdante puede continuar actuando en su propio nombre, con independencia del apoderado, a menos que, en el propio poder preventivo, se estableciera una autolimitación de las facultades dispositivas del poderdante. A este respecto, cabe destacar la resolución de la DGDEJ¹⁵ de Cataluña en la que se admite la inscripción de las autolimitaciones a la facultad de disponer.

Lopez Ribagorda¹⁶ explica el proyecto, en el que está inmerso el Ministerio de Justicia, que permitirá la implantación de un nuevo modelo de Registro Civil en el que la informatización a través de INFOREG es la clave del éxito a corto plazo del sistema. Evidentemente, mientras no tengamos acceso online al Registro Civil, esto no será posible. La necesidad de conocer si el compareciente ha otorgado una o más medidas voluntarias de apoyo justificaría, al menos durante el tiempo que no esté operativo el acceso telemático al Registro Civil, la conveniencia de consultar el informe de su actividad notarial mediante el uso de bases de datos (IUI), a instancia del propio interesado. Una vez se tenga este acceso, el notario debería consultarlo cuando se trate de actos dispositivos de trascendencia económica o sea conveniente conocer la existencia de otras medidas de apoyo.

Debemos pensar que los acuerdos de apoyo pueden haber sido otorgados por persona con una deficiencia, que de alguna manera lo conduzca a la prodigalidad o a la excesiva disposición de bienes sin causa justificada, dilapidando su patrimonio. Estas personas con una aparente aptitud plena para manifestar su voluntad pueden haber otorgado previamente un acuerdo de apoyo que debidamente inscrito en el Registro Civil perjudicará a terceros (el Anteproyecto catalán contempla incluso el otorgamiento de autolimitaciones). Efectivamente, el art. 73 de la LRC dispone que *“las resoluciones a que se refiere el artículo anterior sólo serán oponibles frente a terceros cuando se hayan practicado las oportunas inscripciones”*. Lo mismo hay que entender respecto de la inscripción de medidas de apoyo voluntarias a que se refiere el art. 77 de la misma Ley: *“Es inscribible en el registro individual del interesado el documento público que contenga las medidas de apoyo previstas por una persona respecto de sí misma o de sus bienes”*.

¹⁵ JUS/3040/2012 de 28 de noviembre

¹⁶ LOPEZ RIBAGORDA, David, “La trascendental incorporación del notario a las tareas del estado civil”, *Revista El Notario del Siglo XXI*, agosto de 2021, núm. 98, p. 24.